

RE: PROCESO ORDINARIO LABORAL 850013105002-2019-00279-01

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 29/11/2021 2:47 PM

Para: ZORAIDA CORONADO PARRA <soritaco@gmail.com>

Doctora

Zoraida Coronado Parra

Cordialmente acuso recibido.

Atentamente,

César Armando Ramírez López
Secretario General

De: ZORAIDA CORONADO PARRA <soritaco@gmail.com>**Enviado:** lunes, 29 de noviembre de 2021 8:35 a. m.**Para:** rballesteros@ugpp.gov.co <rballesteros@ugpp.gov.co>; ramirezgomezdog@gmail.com

<ramirezgomezdog@gmail.com>; Laura Katherine Miranda Contreras

<notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja

<sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: PROCESO ORDINARIO LABORAL 850013105002-2019-00279-01

Se suscribe respetuosamente,

Zoraida Coronado Parra
Abogada litigante
Especialista en Derecho Público
Tel. 320 302 1056

----- Forwarded message -----

De: **ZORAIDA CORONADO PARRA** <soritaco@gmail.com>

Date: dom, 28 de nov. de 2021 a la(s) 17:21

Subject: PROCESO ORDINARIO LABORAL 850013105002-2019-00279-01

To: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co> ,<rballesteros@ugpp.gov.co> , <ramirezgomezdog@gmail.com> ,<notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>

Buen dia adjunto allego alegatos en segunda instancia del proceso de la referencia, con copia a las demandadas tal y como lo consagra el decreto 806 de 2020

Se suscribe respetuosamente,

Zoraida Coronado Parra

Abogada litigante

Especialista en Derecho Público

Tel. 320 302 1056

Zoraida Coronado Parra

Abogada Especializada en Derecho Público
Universidad Autónoma de Colombia



DOCTOR
ALVARO VINCOS UREÑA
HONORABLE MAGISTRADO PONENTE
TRIBUNAL SUPERIOR
Yopal, Casanare
E. S. D.

Ref.- PROCESO ORDINARIO LABORAL DE DEVOLUCION DE SALDOS 850013105002-2019-00279-01
DEMANDANTE: **MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA**
DEMANDADA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.,

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

ZORAIDA CORONADO PARRA, mayor de edad, domiciliada y residente en el municipio de Monterrey, Casanare, con oficina en la Calle 18 3-49, identificada con la cédula de ciudadanía 21.448.136 expedida en Amalfi (Ant.), con tarjeta profesional 164332 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la parte demandante de la referencia; al Honorable Magistrado y con mi acostumbrado respeto me dirijo, estando dentro del término legal para hacerlo, me permito presentar ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA tal y como ordena su despacho en el auto de fecha 19 de noviembre de 2021, notificado en el estado 182 de fecha 22 de noviembre de 2021 y en tal sentido me pronuncio en los siguientes términos:

Radicó mi inconformismo frente a la negativa del Juzgado Segundo Laboral del Circuito al despachar desfavorablemente las pretensiones a mi representada, cuya pretensión fue que se ordenara a la demandada devolver los saldos que posee mi representada en su cuenta individual de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Frente a la decisión del a quo considero que se vulnera el derecho a mi poderdante de recibir los dineros que aportó al fondo las pensiones que administra la demandada en su cuenta individual y tal como lo hice saber en mis alegatos conclusivos, mi poderdante aportó hasta la fecha de presentación de la demanda un capital que no le es suficiente para pensionarse, motivo por el cual decidió solicitar la devolución de saldos, de hecho hasta el mismo momento en que se profiere la sentencia mi poderdante continuó cotizando y aún así este capital no le es suficiente para pensionarse, por lo que en su cuenta de ahorro individual de cotizaciones cuenta con un aporte de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$109.110.189.00); sin embargo, la demandada trajo al proceso a entidades del orden estatal a fin de vincularlas con la pensión de mi poderdante, entidades en las cuales mi poderdante no cotizó ni tuvo vínculos con ellas, como lo es UGPP, COLPENSIONES entre otras como Gobernación de Casanare, no obstante, fueron vinculadas y acudieron al proceso con estos mismos argumentos “ninguna relación tiene para con la pretensión de devolución de saldos ni pensión de MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA” y a la que realmente tiene derecho a las luces del artículo 66 de la Ley 100 de 1993 ““Devolución de Saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a



éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho". y al que la Honorable Corte Constitucional hiciera un profundo análisis en sentencia C-375 de 2004, y la cual refiere en el siguiente sentido: "La Corte, en la citada sentencia, afirmó que la figura de la devolución de saldos incorporaba "una permisión libre en cabeza de los mencionados cotizantes, en el sentido de autorizarlos a optar por recibir la señalada restitución dineraria, o no hacerlo, y continuar cotizando al sistema hasta tanto alcancen el monto requerido de cotizaciones para acceder al beneficio pensional". De esta forma, concluyó que la disposición incorporaba una "posibilidad no obligatoria" para los afiliados de recibir la indemnización o devolución de aportes y, así mismo, "la no prohibición" de continuar cotizando al sistema hasta acreditar el requisito pensional faltante. Además, explicó que la figura de la devolución de saldos no imponía la obligación de recibir dicha prestación, sino que ofrecía una alternativa, pues "en cabeza del afiliado" permanece la decisión de optar o no por dicha opción. También afirmó que aceptar la hipótesis que indicaba que era obligatorio seguir trabajando de manera forzada hasta tanto se adquiriera el monto de cotización para acceder a una pensión de vejez,

"daría al traste con principios y fines constitucionales, tales como la libertad y la dignidad humana. De igual manera, resulta irrazonable instituir la obligación de seguir aportando al fondo pensional hasta tanto se alcance las semanas de cotización requeridas, a sujetos que están desempleados y que, dada su avanzada edad, difícilmente podrán conseguir otra fuente de ingresos. Ante las posibilidades ofrecidas a esta categoría de aportantes, la posibilidad de optar por la alternativa propuesta en la regla acusada, no vulnera el derecho a la igualdad".

Conforme a lo anterior y como se reiteró en los alegatos conclusivos, el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 admite una única interpretación concordante con la Constitución, según la cual la disposición otorga al afiliado una de dos facultades: la de optar por la devolución de saldos o de seguir cotizando. Por tanto, no incorpora la opción de negar la devolución de saldos cuando sea solicitada por una afiliada, mujer, de 57 años, así se alegue que existe la posibilidad de que ella, una vez cumpla 60 años – fecha de redención normal del bono–, pueda alcanzar el capital necesario para financiar una pensión de vejez y ni aún así hoy mi poderdante con SESENTA Y TRES (63) años, el capital ahorrado no le alcanza para una pensión digna ni siquiera alcanza para el 110% de pensión.

Ahora, respecto a la pensión que pretende la demandada en estos momentos, veamos como mediante escrito de fecha 12 de julio de 2016, responde a dicha petición de manera negativa a la pensión solicitada por mi poderdante, documento que obra a folios 6 y 7 de mi escrito de demanda, escrito en el que además de negar la petición de pensión para esa época solicitada, obligan a mi poderdante a esperar que solucionaran un tema del bono pensional, bono que solamente hasta la fecha en que mi poderdante hace la solicitud de pensión proceden a realizar algunas gestiones porque fue realmente mi poderdante quien a través de sendos escritos tuvo que acudir para lograr conseguir algunos documentos que eran necesarios y que la demandada le requería para realizar los trámites de una supuesta pensión que no es posible hasta la fecha porque mi poderdante no cuenta con el capital suficiente para que éste alcance siquiera al 110% del salario mínimo y pretender hoy que mi poderdante continúe esperando dichos tramites, va en contra de los derechos que le asisten a mi poderdante a recibir y obtener la devolución de saldos pretendida a través de la presente acción.

Finalmente, y si en gracia de discusión se aceptara que mi poderdante está obligada a pensionarse con el capital que no es suficiente y el 110% frente al salario base de cotización se le estaría desmejorando su ingreso por cuanto hoy cotiza sobre un salario de \$2.845.080.00, lo cual estaría desmejorando su ingreso al pretender pensionarla con el 110% del Salario Mínimo. Recordemos que mi poderdante no está inscrita en el sisbèn como se probó desde un comienzo de la demanda, mi poderdante aporta como empleada vinculada a la empresa M&C TRANSPORTES así se evidencia en la historia laboral consolidada de Porvenir que se allegó con la respectiva demanda, empresa donde no devenga un salario mínimo y al pensionarse con el 110% del salario mínimo se le estaría vulnerando su derecho a una retribución digna desmejorando sus ingresos para el sostenimiento.



FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIALES

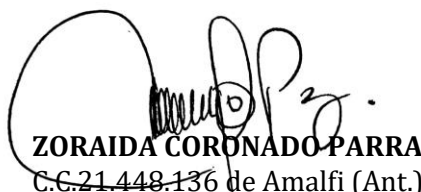
El fundamento de la pretensión de devolución de saldos en la demanda es el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 y como ya se explicó anteriormente admite una única interpretación concordante con la Constitución, según la cual la disposición otorga al afiliado una de dos facultades: la de optar por la devolución de saldos o de seguir cotizando. Por tanto, no incorpora la opción de negar la devolución de saldos cuando sea solicitada por una afiliada, mujer, de 57 años, así se alegue que existe la posibilidad de que ella, una vez cumpla 60 años –fecha de redención normal del bono–, pueda alcanzar el capital necesario para financiar una pensión de vejez, por hoy cuenta ya con 63 años y desde que cumplió sus 57 años ha venido casi que rogando a la demandada en un comienzo para que la pensionara, quien le niega la petición y es por eso que se acudió a la devolución de saldos hoy negada por parte del administrador de justicia.

Finalmente debo traer a colación la sentencia T-122 DE 2019, la cual consagra de manera muy precisa: *“Para la Sala, la negativa del fondo de pensiones de otorgar la devolución de saldos constituye una restricción a la libertad de elección de la accionante, que desconoce la ratio decidendi de la sentencia C-375 de 2004. Por tanto, dado que en el presente caso se encuentra acreditado que la accionante cumple los requisitos para acceder a la devolución de saldos, lo pertinente es proceder con la redención anticipada del bono pensional (artículo 16 del Decreto 1748 de 1995) y efectuar la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual de la accionante, motivo por el cual se concederá el amparo solicitado (...).”*

Significa lo anterior que mi poderdante desde el momento en que cumple sus 57 años hasta el día de hoy insiste en la devolución de sus saldos con los respectivos rendimientos como se ha reiterado en la demanda, alegatos conclusivos y el presente traslado, ha sido un trasegar de SEIS (06) largos años pretendiendo de una manera u otra que se realice la devolución de los dineros que con el esfuerzo de su trabajo ahorró en la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (hoy demandada), para que devuelva el ahorro que realizara y el cual no alcanzó a completar el capital suficiente para pensionarse debe ordenarse a la demandada que proceda a realizar la devolución de saldos a que tiene derecho por mandato legal y constitucional.

En los anteriores términos dejo rendidos mis alegatos conclusivos en segunda instancia ante el Honorable Magistrado Ponente a quien muy respetuosamente le solicito revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar ordenar a la demandada proceda a devolver los saldos que MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA tiene derecho a recibir por haber cotizado y que por el hecho de no constituir un capital suficiente para pensionarse deben ser devueltos a quien le asiste el derecho y para el caso en concreto a MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA, devolución que debe ordenarse devolver dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que su despacho profiera.

Atentamente,



ZORAIDA CORONADO PARRA

C.C.21.448.136 de Amalfi (Ant.)

T.P.164332 del Consejo Superior de la Judicatura